

Recurso nº 174/2020

Acuerdo de 23 de julio de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación “Compra de 545 contenedores de residuos de carga bilateral en Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales” de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios El Alberche de la Consejería de Vivienda y Administración Local.

En fecha 16 de julio se presenta el recurso especial en materia de contratación solicitando la anulación de la exclusión del licitador Sulo Iberica, S.A, acordada por la Mesa de contratación en fecha 6 de julio , acuerdo en el que se insta también la presentación de la documentación al único licitador restante:

“Realizada la tramitación prevista en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para las ofertas formuladas en términos que las hagan anormalmente bajas, y a la vista del informe de fecha 29 de junio de 2020, emitido por la Dirección General de Administración Local, la Mesa considera que la oferta de la empresa PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. no es viable, por lo que queda excluida de la licitación.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el art. 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa acuerda requerir la documentación a SANIMOBEL, S.A. que es el siguiente licitador, según el orden en el que fueron clasificados, una vez efectuada la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en la licitación del presente contrato”.

Según la recurrente, la denominación actual de Plastic Omnium y con la que licitó es SULO IBERICA, constando la misma en el informe a la baja temeraria que acompaña, cuya argumentación coincide con el informe de los técnicos de la Administración.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación hasta la

resolución del presente recurso considerando los perjuicios que le acarrearía la continuación del procedimiento.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Con fecha 17 de julio de 2020, se solicita al órgano de contratación la remisión del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no ha sido remitido a fecha de hoy.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun

concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

Dado que la Mesa de Contratación acuerda por sí la exclusión y solicitar la documentación preceptiva al otro licitador en litigio, el supuesto es en todo equivalente al recurso contra la adjudicación donde la suspensión del procedimiento es por ministerio legal.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios al interesado afectados, y que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por

unanimidad:

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del contrato de suministro “Compra de 545 contenedores de residuos de carga bilateral en Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales” de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios El Alberche convocado por la Consejería de Vivienda y Administración Local, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por: PELÁEZ ALBENDEA LAUREANO JUAN
Fecha: 2020 07 23 22:34